



GD-F-008 V.9

Página 1 de 8

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20154010007165 DEL 27/03/2015

"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 5° del Decreto 1484 de 2014 y en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual "*se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones*", es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 5° del Decreto 1484 de 2014, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que "*La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.*"

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1484 de 2014; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de SAN MIGUEL, del departamento de SANTANDER, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2013, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 6° del Decreto 1484 de 2014.

Que contra la decisión de esta superintendencia sobre el proceso de certificación, procede únicamente el recurso de reposición, el cual debe ser interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo, tal como lo señala el artículo 76 del C.P.A.C.A., recurso que se resuelve en este acto administrativo.

2. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010064905, del 26 de diciembre de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de SAN MIGUEL, departamento de SANTANDER, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 6° del Decreto 1484 de 2014:

1) Reporte al SUI del Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, el cual deberá estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011 o la norma que la modifique, complemento o sustituya.

En caso de no poder acreditar el requisito de la forma descrita, podrá:

α) Reportar en el SUI el formato Balance Subsidios y Contribuciones de la vigencia a certificar.

2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010064905 del 26 de diciembre de 2014.

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010064905, se envió citación al señor alcalde del municipio de SAN MIGUEL, del departamento de SANTANDER, mediante el oficio No. SSPD 20144010808711, del 26 de diciembre de 2014, enviado por correo certificado el 05 de enero de 2015, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

El representante legal del municipio de SAN MIGUEL - SANTANDER se notificó personalmente el 27 de enero de 2015 del contenido Resolución No. SSPD 20144010064905.

El señor JESÚS AYALA VILLAMARÍN, en su calidad de alcalde del municipio de SAN MIGUEL, del departamento de SANTANDER, mediante documento radicado en esta entidad bajo los números SSPD 20155290047852 del 3 de febrero de 2015 y 20155290048982 del 4 de febrero de 2015, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010064905.

3. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

3.1 Verificación de los requisitos de forma

El artículo 77 del C.P.A.C.A, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de SAN MIGUEL, del departamento de SANTANDER, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, los escritos radicados con los Nos. SSPD 20155290047852 del 3 de febrero de 2015 y 20155290048982 del 4 de febrero de 2015 reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto, se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

3.2 Argumentos del recurrente

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

"MOTIVACIÓN (sic)

Dentro de la resolución aparece que no se cumplió por cuanto se reportó al SUI el acuerdo 002, pero el mismo no señala los porcentajes de contribuciones para los estratos 5, 6, industrial y comercial y en el municipio se llevó a cabo el estudio de estratificación urbana de acuerdo a la metodología dada por el Departamento Nacional de Planeación para ello anexo la página 25 del "Manual de Método Estadístico y Procesamiento de datos para la conformación de estratos" en la cual determinaba que tipo de tipología debía utilizar el municipio y hasta que estrato debía quedar, para el Municipio de San Miguel se aplicó la tipología 2 y de igual manera indica que el número de estratos es 2 o (sic) 3 estratos. Tampoco existen estratos industrial y comercial, por cuanto no hay industrias en el municipio y no hay negocios grandes en el municipio que se pueda considerar comercial, los pocos negocios que hay están dentro de la misma vivienda y el área no corresponde para considerarse estrato comercial.

También se reportó al SUI el formato "Balance subsidios y contribuciones" de la vigencia 2013, a través de la opción no aplica es decir sin información. El municipio de San Miguel ESTUVO DESCERTIFICADO por parte de la SSPD mediante resolución No. SSPD 20124010035985 del 19-11-2012 por lo cual el municipio NO MANEJÓ LOS RECURSOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DURANTE LA VIGENCIA 2013, estos recursos estuvo en manos de la Gobernación de Santander y no fue posible que nos giraran los subsidios durante este lapso de tiempo. (Anexo resolución No. SSPD 20124010035985 del 19-11-2012)."

3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con los documentos radicados con los Nos. SSPD 20155290047852 del 3 de febrero de 2015 y 20155290048982 del 4 de febrero de 2015, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

- 3.3.1. Certificación del secretario de planeación municipal sobre la existencia de predios en los estratos 1, 2 y 3 y sobre la descertificación que causó la certificación como NO APLICA del Formato Balance Subsidios y Contribuciones.
- 3.3.2. Copia de dos hojas del Manual de método estadístico y procesamiento de datos para la conformación de estratos del Departamento Administrativo de Planeación.
- 3.3.3. Copia de la Resolución No. SSPD 20124010035985 del 19 de noviembre de 2012.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

4. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

4.1. Argumentos expuestos sobre el aspecto relacionado con la aplicación de la metodología señalada por el Gobierno Nacional, para asegurar el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones.

En cuanto a este aspecto, el municipio lo incumplió por cuanto reportó en el SUI el Acuerdo No. 002 del 27 de febrero de 2013 pero en él no se señalaron los porcentajes de contribución para los estratos 5, 6 y los usos industrial y comercial, además reportó el formato Balance Subsidios y contribuciones como No Aplica.

Para analizar los argumentos del recurrente sobre el cumplimiento de éste aspecto, este despacho se pronunciará frente a las opciones señaladas en el Decreto 1484 de 2014, que el recurrente manifestó cumplir, así:

- Reporte al SUI del Acuerdo de porcentajes de subsidios y contribuciones aplicable a la vigencia 2013:

Al respecto el recurrente señala que según el estudio de estratificación urbana en el municipio de San Miguel sólo existen los estratos 2 y 3.

Inicialmente, es de suma importancia manifestar, que es la misma norma la que en su literalidad, contempla en forma clara y precisa los requisitos, términos y exigencias, que los municipios y distritos deben cumplir con miras a obtener la certificación que les permita manejar los recursos del SGP-APSB, dentro del marco legal contemplado en el Decreto No. 1484 de 2014.

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que a través de la estratificación, se clasifica a la población según sus condiciones socio-económicas, a efectos de permitir que la redistribución del ingreso y el principio de solidaridad que deben imperar en el régimen de tarifas para los servicios públicos domiciliarios se cumplan efectivamente (artículo 367 de la Constitución). La Ley 142 de 1994, en este caso, hace uso de este mecanismo para determinar qué sectores de la población deben, además de pagar los costos propios de los servicios públicos de que son usuarios, asumir un pago extra, a fin de colaborar con ese otro sector de la población que no tiene los recursos suficientes para cubrir los costos reales de estos servicios.

Ahora bien, para el caso del municipio de SAN MIGUEL, el Concejo Municipal a través del Acuerdo No. 002 del 27 de febrero de 2013 sólo fijó los siguientes porcentajes de subsidios y omitió así lo correspondiente a las contribuciones:

ACUERDO:					
ARTÍCULO 1º.- Las Entidades que prestan los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de San Miguel, aplicarán los siguientes factores de subsidio a las tarifas de la vigencia 2013, de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994, sin que dichos subsidios excedan, en ningún caso, el valor de los consumos básicos o de subsistencia.					
ESTRATOS	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO
	CARGO FIJO	CONSUMO BASICO	CARGO FIJO	CONSUMO BASICO	
UNO	70%	70%	70%	70%	70%

MT.830210.1307					
DOS	40%	40%	40%	40%	40%
TRES	15%	15%	15%	15%	15%

Con ocasión a lo afirmado por el recurrente en el sentido de indicar que en el municipio no existen usuarios en los estratos 5, 6 ni los usos comercial e industrial, se procedió a revisar el Decreto No. 019 de 2008 a través del cual se adoptó la estratificación urbana y allí se señala que solo existe en el municipio los estratos 1 y 2, tal como se puede ver a continuación:

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Adóptese la estratificación socioeconómica del Casco Urbano efectuada por esta Alcaldía Municipal, ajustándose a los parámetros y lineamientos metodológicos del Departamento Nacional de Planeación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Esta estratificación, de conformidad con el artículo 101.4 de la ley 142 de 1994 es única, es decir, se utilizará para la fijación de tarifas por la prestación de todos los servicios públicos domiciliarios.

ARTÍCULO TERCERO. Las viviendas se clasifican en dos (2) estratos socioeconómicos denominados así:

I) Bajo-bajo,

II) Bajo.

Ahora bien, el municipio de SAN MIGUEL reportó en el Formato Estratificación y Coberturas del SUI, es preciso señalar que el mencionado formato correspondiente a la vigencia 2013 (que se está analizando en éste acto administrativo), es decir, el denominado 1A2014, aún se encuentra en estado pendiente, esto es, el municipio no ha enviado la información allí solicitada, tal como se observa en la siguiente imagen:

Alcaldía	80961	ALCALDIA SANTANDER-SAN AAA MIGUEL	Estratificación 2014 Anual	1	FORMATO PARA REPORTAR LA ESTRATIFICACION AL SUI	Cargue Masivo	PENDIENTE	ESTRATIFICACION NO
----------	-------	-----------------------------------	----------------------------	---	---	---------------	-----------	--------------------

No obstante lo anterior, el recurrente allega la siguiente certificación, con la que este despacho confirma la afirmación del recurrente sobre la inexistencia de los estratos 5, 6, industrial y comercial en el municipio, así:

EL SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

CERTIFICA

Que, en el Municipio de San Miguel Santander, se llevó a cabo el proceso de estratificación de acuerdo a la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), dando como resultado los estratos 1, 2 y 3, es decir, en este Municipio no existen estrato 5 y 6, ni Industrial, ni comercial.

A su vez, en el reporte al SUI el formato "Balance subsidios y contribuciones" de la vigencia 2013, a través de la opción no aplica es decir sin información. El municipio de San Miguel ESTUVO DESCERTIFICADO por parte de la SSPD mediante resolución No. SSPD 20124010035985 del 19-11-2012 por lo cual el municipio NO MANEJÓ LOS RECURSOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DURANTE LA VIGENCIA 2013, estos recursos estuvo en manos de la Gobernación de Santander y no fue posible que nos giraran los subsidios durante este lapso de tiempo.

Se expide en San Miguel Santander, a los tres (3) días del mes de febrero de dos mil quince (2015).

ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA
Secretario de Planeación

En consecuencia, es pertinente concluir que el Acuerdo Municipal No. 002 del 27 de febrero de 2013, de aprobación de subsidios y aportes solidarios reportado en el SUI, pese a que no fijó los montos a facturar por concepto de contribuciones para los suscriptores de estratos 5, 6, industrial y comercial, se estableció que el ente territorial no cuenta con dichos suscriptores ni usos y por ello, con éste documento el municipio acredita el cumplimiento del requisito objeto de estudio en este acto administrativo.

- Reporte al SUI del formato de "Balance Subsidios y contribuciones".

Al respecto el recurrente señala que debido a que se encuentra descertificado y al no giro de los recursos de subsidios por parte de la gobernación de Santander, reportó como No aplica el formato "Balance Subsidios y contribuciones" del SUI.

Sobre lo anterior, debemos manifestar que no compartimos los argumentos expuestos por el recurrente, pues el numeral 17.11 del artículo 17 del Decreto 1484 de 2014 señaló que es obligación de los municipios descertificados: *"Realizar los reportes de información al Sistema Único de Información – SUI, para lo cual el departamento remitirá la información necesaria al municipio o distrito."*

Para que los planteamientos esgrimidos por el recurrente fueran tenidos como eximente de responsabilidad, debían enmarcarse dentro de los conceptos de fuerza mayor o caso fortuito, que están definidos por el Artículo 1º de la Ley 95 de 1890, en los siguientes términos: *"Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público"*.

Al respecto el tratadista Arturo Alessandri Rodríguez, en su obra *"De la responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil"*, Páginas 599 y 600, sobre el caso fortuito y la fuerza mayor señala:

"El caso fortuito o la fuerza mayor supone, (...), un acontecimiento imprevisto e irresistible. Es imprevisto, cuando no hay ninguna razón especial para creer en su realización e irresistible, cuando no es posible evitar sus consecuencias."

El hecho debe ser imprevisto e irresistible en sí mismo, es decir, que ni el agente ni ninguna otra persona colocada en las mismas circunstancias de tiempo y de lugar habría podido preverlo. Se requiere una imposibilidad absoluta. Una simple dificultad o una imposibilidad relativa, personal del agente, no basta; la culpa se aprecia en abstracto. Un hecho que hubiera podido prever y evitar con mayor diligencia o a costas de un mayor esfuerzo o sacrificio no es caso fortuito; un hombre prudente lo habría previsto y evitado. Esto es suficiente para privarlo de ese carácter."

En reiterada jurisprudencia se ha estudiado lo referente al caso fortuito o fuerza mayor, de donde se destaca lo siguiente¹:

"Según el verdadero sentido o inteligencia del artículo 1º de la ley 95 de 1890, los elementos integrantes del caso fortuito o fuerza mayor (...), deben ser concurrentes (imprevisibilidad e irresistibilidad) lo cual se traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se le puede resistir, no se da tal fenómeno, como tampoco se configura a pesar de ser irresistible pudo preverse. De suerte que la ausencia de uno de sus elementos elimina la estructuración de la fuerza mayor o caso fortuito."

Si sólo puede calificarse como caso fortuito o fuerza mayor el hecho que concurrentemente contemple los caracteres de imprevisible e irresistible, no resulta propio elaborar un listado de los acontecimientos que constituyen tal fenómeno, ni de los que no lo constituyen. Por tal virtud, ha sostenido la doctrina nacional y foránea que un acontecimiento determinado no puede calificarse fatalmente, por sí mismo y por fuerza de su naturaleza específica, como constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que es indispensable, en cada caso o acontecimiento, analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho".

De la jurisprudencia y la doctrina expuesta, podemos concluir que, en relación con la fuerza mayor o caso fortuito, se debe tener en cuenta:

- a) En cada caso concreto se debe analizar y ponderar todas las circunstancias que rodean el hecho, para determinar si éste constituye o no fuerza mayor o caso fortuito.
- b) Los hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito deben ser alegados y probados por quien los invoca. Es decir, la carga de la prueba la debe soportar quien invoca tales hechos y no quien debe valorarlos.

¹ Sentencia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil 20 de noviembre de 1989

- c) Debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes; esto es, que su previsión escape en condiciones normales a cualquier sujeto y no a una persona en particular, y que además de no haberse podido prever, sea imposible evitar que el hecho se presente.
- d) No constituyen fuerza mayor o caso fortuito los hechos que acontecen frecuentemente o con cierta periodicidad, ni hay fuerza mayor o caso fortuito cuando el obstáculo dificulta el cumplimiento de una obligación, pero no la imposibilita.
- e) Los hechos no deben ser atribuibles a la culpa, esto es, negligencia, descuido o impericia, de la persona que los invoca.

De acuerdo con lo anterior, se concluye, que para que los argumentos del recurrente sobre el no giro de los recursos de subsidios por parte de la gobernación y el hecho de estar descertificado sean tenidos en cuenta como hechos de fuerza mayor o caso fortuito, debió demostrarse la ocurrencia de estos y la proporción en que influyeron para la determinación de una exoneración de responsabilidad por parte del alcalde municipal.

Sin lugar a dudas, los hechos que aduce el recurrente no se configura en hechos imprevisibles e irresistibles, y por tanto sobrevinientes, pues es evidente que los mismos no hacían imposible el cumplimiento del requisito en mención.

Lo anterior, por cuanto el formato "Balance Subsidios y Contribuciones" del SUI requiere la siguiente información, que no se circunscribe únicamente a los recursos del SGP-APSB destinados a subsidios:

	NOMBRE DEL PRESTADOR
1	
2	NIT
3	DV
4	SERVICIO
5	CODIGO DANE
6	RECURSOS MUNICIPALES O DISTRITALES PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA NACIÓN (DE LIBRE INVERSIÓN)
7	RECURSOS MUNICIPALES O DISTRITALES PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA NACIÓN (DESTINADOS AL SECTOR)
8	RECURSOS POR CONCEPTO DE REGALÍAS
9	RECURSOS PRESUPUESTALES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
10	OTROS RECURSOS PRESUPUESTALES A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 89.8 DE LA LEY 142 DE 1994
11	RENDIMIENTOS DE LOS RECURSOS O BIENES APORTADOS BAJO CONDICIÓN POR ENTIDADES OFICIALES O TERRITORIALES
12	RENDIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS, DERECHOS O RECURSOS DE CAPITAL APORTADOS POR LAS ENTIDADES OFICIALES O TERRITORIALES
13	RECURSOS PROVENIENTES DE LA CONTRIBUCIÓN POR APORTES SOLIDARIOS DE LOS USUARIOS RESIDENCIALES DE LOS ESTRATOS 5 Y 6 Y, EL SECTOR NO RESIDENCIAL OBJETO DE APOORTE SOLIDARIO
14	RECURSOS PROVENIENTES DE LA CONTRIBUCIÓN POR APORTES SOLIDARIOS AL INTERIOR DEL ÁMBITO DE OPERACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO, A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 057 DE 2006

RECURSOS PROVENIENTES DE OTROS FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL ORDEN MUNICIPAL, DISRITAL Y DEPARTAMENTAL
RECURSOS APORTADOS A OTROS FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS DEL ORDEN MUNICIPAL, DISRITAL Y DEPARTAMENTAL, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 89.2 DE LA LEY 142 DE 1994 Y EL ARTÍCULO 15 DEL DECRETO 565 DE 1996
RECURSOS SOLICITADOS POR EL PRESTADOR POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS
RECURSOS GIRADOS AL PRESTADOR POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS
SUBSIDIOS OTORGADOS A LOS USUARIOS DE ESTRATOS SUBSIDIABLES
FECHA DE GIRO DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PRESTADOR
15
16
17
18
19
20

En consecuencia, no es posible tener en cuenta el formato en mención para acreditar el cumplimiento de éste requisito, puesto que el municipio lo reportó como No Aplica, es decir, sin información.

4.2. Del recurso de apelación.

Es necesario adarle al recurrente que contra la Resolución No. SSPD 20144010064905 del 26 de diciembre de 2014, no procede el recurso de apelación, tal como lo señala el numeral 2, del artículo 74 del C.P.A.C.A., así:

"ARTICULO 74. RECURSOS EN LA VÍA GUBERNATIVA. Por regla general, en contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:

(...)2. *El de apelación, ante el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito. No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos.*"(...) (Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, es claro que las decisiones adoptadas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, no están sujetas a ser impugnadas mediante el recurso de Apelación.

Como quiera que, la función de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico fue delegada por la Superintendente de Servicios Públicos al Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo mediante la Resolución No. 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, las decisiones que expida este funcionario en virtud de estos actos administrativos serán susceptibles solamente del recurso de reposición. Dicha delegación tiene como fundamento los Artículos 9 a 10 de la ley 489 de 1998.

Además, el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 dispone que: "Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas". Con fundamento en esta norma, se expidió la Resolución de delegación.

Al respecto la Corte Constitucional señaló: "Decisiones del delegatario. El delegatario toma dos tipos de decisiones: unas, para el cumplimiento de las funciones del empleo del cual es titular, y otras, en ejercicio de la competencia delegada, para el cumplimiento de las correspondientes funciones del empleo del delegante. En estricto sentido, es frente a estas últimas que se actúa en calidad de delegatario pues en el primer evento él no es delegatario sino el titular de su empleo. Además, las decisiones que toma en calidad de delegatario tienen el mismo nivel y la misma fuerza vinculante como si la decisión hubiese sido tomada por el delegante y, se asume, "que el delegado es el autor real de las actuaciones que ejecuta en uso de las competencias delegadas, y ante él se elevan las solicitudes y se surten los recursos a que haya lugar, como si él fuera el titular mismo de la función".²

Así mismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló respecto de este tema:

"Con relación a ese preciso aspecto, es del caso poner de presente que, de conformidad con las disposiciones procedimentales generales contenidas en la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo (artículos 1 a 81) y las normas que regulan los procedimientos administrativos especiales, para la procedencia del recurso de apelación se requiere la configuración de dos presupuestos, a saber: a) que exista un funcionario superior jerárquico respecto de aquel que profiere la decisión objeto del recurso, por cuanto, en atención a la naturaleza y esencia del mismo, se requiere se sea conocido y resuelto por una autoridad o funcionario que se encuentre en un nivel jerárquico superior al que emitió la decisión, y b) que la ley no haya prohibido la procedencia de tal recurso.

Desde esa óptica, en el presente caso objeto de examen, es evidente la ausencia del primer presupuesto exigido para la procedencia del recurso de apelación, dado que, en virtud de la delegación efectuada mediante la resolución SSPD 7605 de 23 de mayo de 2002, el Director Territorial Centro de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios investigó y sancionó a la ETB S.A. ESP y materializó la respectiva decisión a través de la expedición de los actos administrativos demandados, actuación en la que obró como si fuese la autoridad delegante, esto es, el mismo Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, funcionario éste que no tiene superior jerárquico.

En tales condiciones, no encuentra esta Sala de Decisión que con la expedición de los actos administrativos demandados, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios haya violado el derecho constitucional fundamental del debido proceso, ya que dio estricta aplicación a las normas procedimentales del régimen de servicios públicos domiciliarios, por cuanto, si bien la decisión en ellos contenida fue expedida por el Director Territorial Centro -funcionario éste que tiene superior jerárquico-, lo hizo en ejercicio de una función delegada por parte del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, quien dentro de la estructura de dicha entidad no tiene superior jerárquico que resuelva los recursos de apelación interpuestos contra sus decisión, lo cual hace que no se configuren los presupuestos a los que se ha hecho referencia.

Por consiguiente, en ningún momento se desconocieron las disposiciones contenidas en las normas que regulan los servicios públicos, ya que, con base en el artículo 113 de la ley 142 de 1998, en concordancia con los artículo 12 de la ley 489 de 1998 y 50 del C.C.A., se estableció que contra las decisiones adoptadas por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios no procede el recurso de apelación; por lo tanto, al haber actuado el Director Territorial Centro en cumplimiento de un acto de delegación emitido por el mismo superintendente, es claro que no procede el recurso de alzada por haber actuado como si fuera tal funcionario".³

² Corte Constitucional. Sentencia C-372 del 15 de mayo 2002. MP Jaime Córdoba Triviño

³ Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia del 4 de diciembre de 2008. Exp. No. 2005-00847-02.

Así las cosas, en razón a que el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo es delegatario de funciones, los actos administrativos que dicte son susceptibles únicamente de los recursos que proceden contra las decisiones que profiera la Superintendente (delegante), y que por no tener superior jerárquico, sólo procede el recurso de reposición.

Adicionalmente, el artículo cuarto de la Resolución recurrida es claro en indicarle al interesado que el único recurso que procede es el de reposición, así:

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma sólo procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial cumplió el requisito relacionado con el equilibrio entre los subsidios y las contribuciones con el Acuerdo No. 002 del 27 de febrero de 2013, y por lo tanto el recurso formulado por el señor JESÚS AYALA VILLAMARÍN, como alcalde municipal de SAN MIGUEL, prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se revoca.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECHAZAR POR IMPROCEDENTE el recurso de apelación presentado en contra de la Resolución No. SSPD 20144010064905 del 26 de diciembre de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución No. SSPD 20144010064905 del 26 de diciembre de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- CERTIFICAR al municipio de SAN MIGUEL, del departamento de SANTANDER, en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico.

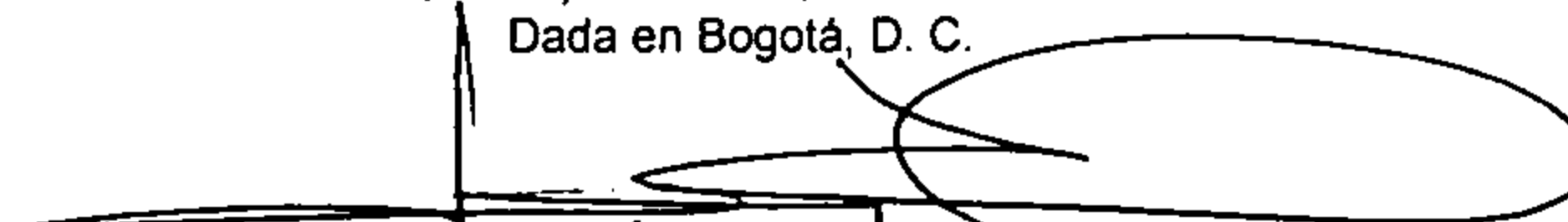
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de SAN MIGUEL, del departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO SEXTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.


JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información
Revisó: Irina Margarita Amin David - Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información
Expediente: 20094017302681003A